

La política de la post verdad

Gonzalo Cordero
Alfredo Joignant

El desprestigio de los políticos y la apatía de los ciudadanos es un fenómeno tan banal y extendido que, en el último tiempo, no sólo se ha agudizado, sino que ha venido acompañado de un ciclo de fortalecimiento de discursos aislacionistas plagados de rasgos xenófobos. Estamos hablando de Europa...pero no sólo de ella. Hace tres meses (el 27 de julio de este año), el diario *El país* publicó un inquietante reportaje sobre la distribución de los partidos “insurgentes” en el viejo continente, es decir aquellos que desafían al establishment partidario: 2/3 son de extrema derecha y 1/3 de la “nueva izquierda”, los primeros derechamente racistas y los segundos con una demagogia redistributiva que desafía el sentido común, o si se quiere, la hegemonía de la economía “racional”. Es cierto: más allá de los riesgos de amalgamas, el sentido común puede no estar en lo correcto, pero ¿bajo qué condiciones se le desafía? Esta pregunta es letalmente pertinente en el hoy y en el ahora. Que Estados Unidos, una potencia mundial levantada sobre el capitalismo, la inmigración y el libre comercio, tenga un candidato como Donald Trump disputando la elección presidencial, es el mejor –y aterrador- símbolo de esto.

Apatía ciudadana y demagogia se han asociado a lo que la revista *The Economist* ha recientemente denominado: la política de la “post verdad”. Esto es una forma de participar en el debate público que utiliza el engaño como arma, pero en una forma que va más allá de la atávica costumbre de mentir, porque de lo que se trata ahora no es de falsear los hechos, sino de quitarle relevancia a la necesidad de ajustarse a ellos. Si lo que se sostiene es cierto o parece cierto, viene a ser más o menos lo mismo, en la medida que conecte con los sentimientos y creencias instaladas a nivel popular.

Además del ejemplo de Trump, para quien un cierto sentido común se ha transformado en un poderoso aliado, la revista cita la forma en que se exageró una eventual inmigración turca en el Reino Unido, para apoyar la opción del Brexit. Y no sería difícil multiplicar los ejemplos de usos de la post-verdad.

Gino Lorenzini, el creador de “Felices y Forrados”, se refirió recientemente al Ministro de Hacienda como “un delincuente”. Aunque luego se disculpó (alegando razones de “sacadas de contexto”), no se trata de un hecho aislado: tan solo recordemos las expresiones del Diputado Gaspar Rivas, quien profirió una andanada de insultos a un conocido empresario. Retóricas de este tipo más bien responden a una manera deliberada de participar en el debate público, de nuevo tipo, las que consisten, por una parte, en la banalización del insulto como lenguaje y, por la otra, en la degradación de la verdad como requisito sustancial del trabajo argumental. Si son estas las retóricas que predominarán en el debate democrático, digámoslo de una vez: estamos liquidados. Y no es una hipótesis que debemos descartar.

Parece que vivimos una época en que a las autoridades políticas, las personas económicamente poderosas o simplemente a quienes -en la retina popular- forman parte de alguna elite, se les puede insultar, a secas, aunque los hechos que se les imputen no sean estrictamente ciertos, porque igual y de alguna manera “se lo merecen”. En el pasado hubo también épocas en que el debate cayó en el insulto y la descalificación, pero entonces era expresión coherente de la polarización o la irreverencia originada en diferencias ideológicas. Hoy, la misma conducta, y hasta con las mismas palabras, es apenas muestra de una insufrible frivolidad que arroja al debate público hacia el circo y sus actores.

La discrepancia, aunque sea ruda en forma y fondo, es consustancial a la democracia, así como lo es que el debate sea abierto a todos los ciudadanos por igual y nadie aspire a una posición de privilegio por su cargo, riqueza o cualquier otra pretensión de estatus. Michael Walzer, aquel gran filósofo estadounidense, calificaba como tiránica la importación de principios de dominación de una esfera a otra (pongamos por caso desde la esfera económica, espiritual o intelectual a la política). Pues bien, es precisamente eso lo que no resulta aceptable en democracia. Pero tampoco es tolerable el uso de la grosería, el anatema o la mentira para degradar y deshumanizar al adversario. Bien sabemos que las palabras constituyen armas y, como tales, pueden inferir heridas y humillaciones.

En esto hay una cierta responsabilidad de las mismas autoridades y de los medios, que al procurar abrir a todos un espacio pluralista de participación sin mínimas exigencias de rigor y con total impunidad a la mentira o el insulto terminan, como en el tango, generando una confusión en que “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.

Discrepar y debatir es muy distinto a insultar y mentir; perder de vista algo tan obvio abre la puerta a la demagogia y, en algunos casos, al populismo de izquierda o de derecha, o simplemente a liderazgos ajenos a los significados culturales del mundo moderno, basado en la igual dignidad de los seres humanos y la racionalidad como único mecanismo válido para confrontar posiciones en el espacio público. Es lo que estamos viendo en varias de las democracias que, hasta hace poco, motivaban nuestra admiración por su madurez, estabilidad y fortaleza institucional.

No sabemos bien cómo detener la energía de la post-verdad. Apelar burdamente al recurso coercitivo de la prohibición equivale a exponerse, con razón, a infracciones a la libertad de expresión. Pero sucumbir sin más a la post-verdad, es dejar morir la democracia.